



Ecuador: entre la ira, el miedo y la esperanza

Milagros Aguirre A,

Quito, enero de 2022

**Los informes de coyuntura cuentan con el auspicio de Brot für die Welt
(Pan para el Mundo), Berlín, Alemania**

El año 2021 —y los siete primeros meses del gobierno de Guillermo Lasso, terminan así: entre la ira, el miedo y la esperanza. Con una economía frágil, con dificultades entre el poder legislativo y el ejecutivo, con una reforma tributaria que pasó por el ministerio de la ley porque la Asamblea no logró siquiera debatirla, y con un alza salarial de 25 dólares en el empleo formal - 425 dólares el salario básico unificado - empieza el nuevo año. La promesa de campaña fue de un incremento de 100 dólares al salario, y, luego de un tira y afloja con gremios empresariales y trabajadores, Lasso resolvió incrementar ese monto durante los cuatro años que durará el gobierno (25 cada año). De todas maneras, el trabajo precario e informal y el desempleo se dejan ver en las calles.

Empieza, además con escalofrantes cifras de migración. De acuerdo al periódico digital Primicias, entre enero y agosto de 2021, 111.672 ecuatorianos salieron hacia México y solo volvieron 42.591. En el mismo período de 2019, antes de la pandemia, viajaron 72.427 personas. Es decir, hubo un incremento del 54,19%. Las historias de niñas, niños y adolescentes ecuatorianos abandonados en el desierto mexicano intentando pasar la frontera son escalofrantes y las de muertes también. Todavía viven en nuestra retina las imágenes que dieron la vuelta al mundo, de dos niños ecuatorianos que fueron lanzados desde el borde superior del muro que divide México y los Estados Unidos, y abandonados en el lugar por los coyotes que les transportaban. En septiembre México decidió pedir visa a los ecuatorianos, pero la esperanza de migrar y la tarea de los coyotes no dan tregua: Guatemala, Nicaragua o El Salvador son los nuevos destinos, con tal de ir a buscar el sueño americano, tal como ocurrió luego del feriado bancario, a fines de los años noventa del siglo pasado.

El 2022 pilla al país endeudado: nada parece suficiente para cubrir el déficit fiscal. Los rezagos de la pandemia siguen, el trabajo informal aumenta y las cifras de desnutrición infantil ya ni sorprenden: de acuerdo a Unicef, en Ecuador, uno de cada cuatro niños y niñas menores de cinco años sufre desnutrición crónica. La situación es más grave para las niñas y niños indígenas: uno de cada dos niños la padece y cuatro de cada 10 presentan anemia. La pobreza por ingresos en Ecuador, considerado un país de ingreso medio alto, alcanzó los mismos niveles del 2010 con el 32,2 % de los ecuatorianos que son pobres: toca sobrevivir con menos de 84,70 dólares al mes, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El gobierno no logra despegarse de ofertas de corte populista: vender un banco estatal

para financiar programas de desnutrición infantil o duplicar la extracción petrolera (de 500 mil a un millón de barriles diarios).

El panorama económico, social y político es complicado: un laberinto en el cual el país aún no encuentra la salida.

Ira, porque el encuentro es un gran desencuentro

No hay diálogos ni encuentros posibles cuando nadie quiere escuchar. Y en el Ecuador de las últimas décadas, cada vez más fragmentado, no parece haber espacio para el diálogo, a pesar de que el gobierno de Guillermo Lasso se ha colocado en la frente la consigna del *gobierno del encuentro* y de que partes interesadas se han sentado un par de veces en la mesa de diálogo.

El encuentro parece imposible cuando los actores de esa convocatoria tienen posturas irresolubles, como el agua y el aceite o, más bien, cuando creen tener posturas diametralmente opuestas. Unos están de espaldas a otros. Los prejuicios obnubilan su razón. Se desprecian. Se ningunean. Se desconocen. Se amenazan. Y, por supuesto, ni conversan ni se encuentran ni debaten ni dialogan.

En una esquina del país se reúnen los “notables de Cusín”, un *remake* de la reunión de 1997 previa a la Asamblea de 1998, en donde representantes de diversos sectores de la sociedad proponían cambios a la Constitución (véase las propuestas de Cusín de entonces... muchas cosas están igual y peor que a fines de los noventa). Entre los notables de Cusín, María Paula Romo y Otto Sonnenholzner, dos caras visibles del gobierno de Lenin Moreno y además, dos caras visibles de los terribles meses iniciales de la pandemia: noticias confusas, corrupción en los hospitales, muertos apilados en las calles, cifras que se salieron de control, corrupción en compra de insumos médicos. Además, Romo, persona *non grata* para el movimiento indígena y los movimientos sociales pues encarna las órdenes de represión y violencia de octubre de 2019. Y para remate, el ex vicepresidente Alberto Dahik, protagonista de escándalos de corrupción en la década de los noventa. Si algunos de los personajes asistentes a la reunión en la antigua casona de hacienda dan su espaldarazo a Guillermo Lasso, ¿cómo evitar que se lo vincule con el gobierno anterior? Las señales por ahí no son claras.

En otra esquina del país se ubican las organizaciones indígenas, movimientos sociales y el Parlamento de los Pueblos, nacido de las manifestaciones de octubre de 2019. Posturas de resistencia al extractivismo, la minería, el petróleo y contra el Estado fallido, ese Estado que no protege y que está plagado de instituciones que parecen ver en el ciudadano común, a su enemigo. Un aparato estatal, en casi todos los niveles, que no está para ayudar sino para complicar la vida de los usuarios, de los ciudadanos de a pie, de las comunidades que, con justo derecho y razón, protestan.

Algunos dirigentes—no todos— se mantienen en la oposición con discursos gastados, lugares comunes, arengas repetidas: contra el alto costo de la vida, contra el FMI, contra la reforma laboral, contra los que están en contra; pero no plantean salida alguna o posibilidades para el país. Por los resquicios de las organizaciones se cuelan encapuchados que suelen armar camorra en las marchas pacíficas —y volverlas violentas—, como ocurrió en octubre de 2019. Encapuchados que no se sabe de dónde asoman ni a qué intereses responden, pero que ayudan al descrédito y a la deslegitimación de las demandas del movimiento indígena. Encapuchados que dan pie a las respuestas represivas del Estado. Las salidas por esa vía tampoco son claras.

Sin embargo de tener el poder, el gobierno tiene terror de un nuevo octubre de 2019, y ha tratado de deslegitimar esta lucha por todos los medios inclusive condenando, ya por el solo anuncio de movilizaciones, de reprimirlas.

El país del desencuentro, el país polarizado, hace difícil cualquier intento de gobernabilidad. El fantasma del correísmo se apodera de la prensa tradicional y, cualquier cosa que suene a oposición, se le atribuye a esa tendencia política, a las teorías conspiratorias, a la sed de venganza o a saldar rencillas casi personales. Nadie separa la paja del trigo. Pero incluso, con ese sector de la sociedad que ha representado la mitad del electorado, el gobierno debe sentarse, dialogar y negociar. No hay otra salida.

Las últimas declaraciones de Lasso acerca del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas-CONAIE, Leonidas Iza, muestran esa tensión permanente y la dificultad del presidente, de sus asesores y también de la prensa, de aproximarse siquiera al movimiento indígena:

“El señor Leónidas Iza es un anarquista, odia a la democracia, la institucionalidad. Al anarquismo hay que enfrentarlo con la Constitución y la ley en la mano (..) lo vamos a enfrentar con todo el poder del Estado, con toda la fuerza pública, para que quienes quieren anarquizar este país, interrumpir servicios públicos y profundizar una crisis económica ya de por sí afectada por la pandemia, terminen con sus huesos en la cárcel, porque no hay más alternativa si quieren anarquizar el Ecuador, este gobierno no se lo va a permitir al señor Leonidas Iza”.

En el fondo, el problema de siempre: falta de traducción y de entendimiento intercultural. Vivir la interculturalidad exige mente abierta y reflexión acerca de conceptos como la democracia, entendidos de dos formas muy diferentes entre mestizos e indígenas. Si no hay ese ejercicio, cualquier diálogo se torna imposible.

Lasso puso más sal en la herida de octubre que no parece que va a cicatrizar: Iza, dijo Lasso, es “eficiente en incendiar edificios públicos, promover el secuestro de periodistas y policías, en mandar a alguien a tirar una piedra por la espalda a una periodista, eficiente en agredir a la ciudad de Quito”.

Grave, cuando se ha comprobado que los responsables de incendiar edificios públicos, en referencia al incendio de Contraloría en octubre del 2019, fueron los propios actores de esa institución, interesados en borrar archivos de los dos últimos contralores (Carlos Pólit y Pablo Celi), acusados de corrupción (fuera del país el primero, en prisión preventiva el segundo) y de la trama de borrar glosas a cambio de favores. Grave porque el presidente asume que oposición es sinónimo de delincuencia, de la misma forma que los gobiernos anteriores, inclusive, que el gobierno de Correa, tan cuestionado por el régimen actual, para quien la oposición era igual a terrorismo y desestabilización y para quien la justicia no estaba en los tribunales sino en sus propias sentencias.

El presidente de la CONAIE tampoco parece tener ganas de conversar con el presidente banquero, a quien se le endosan todos los problemas del neoliberalismo, del capitalismo salvaje y del Estado fallido.

Los desencuentros no son solo entre el gobierno y el movimiento indígena; y el movimiento indígena o el correísmo no son las únicas piedras en el zapato del gobierno ni su enemigo más furibundo. Por supuesto, hay otros actores con los que la gobernabilidad es un problema para cualquier gobierno: la

Asamblea, la Corte Constitucional, los sindicatos, los agricultores, los maestros, los empresarios, los gobiernos locales. Nadie quiere pagar impuestos incluso si estos los deben pagar quienes más ganan. Pero para todos el Estado, esa entelequia, tiene que resolver todos los problemas y los gobernantes, con tal de mantenerse en el poder, terminan haciendo concesiones políticas e insisten en depender de los recursos naturales para subsistir. La economía solidaria, entonces, se presenta como una utopía, lejana del interés nacional.

La ira, la bronca irracional, llevaría, según algunos analistas, a concretarse propuestas como la muerte cruzada, figura aprobada en la Constitución que significaría la renuncia del presidente y de los asambleístas y nuevas elecciones: otro borra y va de nuevo para el país.

La democracia exige dialéctica, diálogo entre contrarios, disensos para llegar luego a consensos. Pero no parecen soplar vientos en esa dirección. El barco del pequeño país sudamericano se estrella contra la intolerancia, los prejuicios, los lugares comunes, las diferencias ideológicas y partidistas, los populismos.

Miedo por el creciente poder narco

En un barrio popular de Guayaquil, la ciudad más grande del país, la fiesta de Navidad se celebró cerrando la calle, con orquesta y baile y con la exhibición de poderosos fusiles en manos de jóvenes sicarios. Ese, uno de los muchos videos de ese estilo que circulan en redes sociales, es una más de las evidencias de que el narco ha hecho metástasis en el país. Ecuador, y lo saben las autoridades, ya no está en el mapa como un país de paso de droga: la droga ocupa el tercer lugar en la economía del país¹ solo por debajo del comercio o la industria manufacturera. Se calcula que esta actividad ilícita mueve 20 mil millones de dólares al año.

Chicos de entre 15 y 25 años o menos fuman crack o droga *hache* y rapean los versos de la violencia mientras se preparan a defender territorios de otros chicos, en otras esquinas, que también rapean los versos de la violencia, de la droga, la enfermedad. Jóvenes que se graban en la calle con cadenas doradas, mujeres en cueros, máquinas de contar billetes, tinas de baño con espuma y pistolas, emulando a falsos héroes, protagonistas de series de

¹<https://www.lahora.com.ec/pais/narcotrafico-millones-poder-bandas-carceles/>

televisión, hacen parte de la cotidianidad de barrios marginales del país. En las ciudades, lujosos carros blindados y ofertas de dinero fácil, a la carta.

Solo este año se han decomisado más de 200 toneladas de cocaína (casi duplicando la cifra de decomisos del 2020: 120 toneladas). Incautaciones de bloques de cocaína, contaminación de contenedores con droga en los puertos, sumergibles con droga y, para completar, las declaraciones del embajador de EE.UU. acerca de “narcogenerales”, es decir, confirmando la penetración del narco en las instituciones del Estado, han puesto al gobierno contra las cuerdas.

Es secreto a voces: policías, militares, fiscales, jueces, políticos, empresarios, contaminados por el dinero del narcotráfico. Sin embargo, el tema no parece estar en las agendas políticas, ni de los partidos políticos o movimientos y organizaciones sociales ni de las ONG, que aún miran esto como un fenómeno lejano y marginal. La alcaldesa de Guayaquil, una de las ciudades más complicadas por la violencia, plantea licencias para portar armas: a la violencia, más violencia. No se le ocurre nada más, en una ciudad carente, hasta ahora, de agua potable, alcantarillado o de vivienda digna.

El gobierno habla de una “guerra” al narcotráfico, no parece tener ninguna estrategia, que no sea la de declarar estados de emergencia para que los militares controlen las cárceles y las calles. Pero sabe que muchos de los soldados de esa guerra están también cooptados por las redes mafiosas. También ha argumentado que el alza de los combustibles que propuso a inicios de su mandato tiene que ver con la estrategia contra el narco que se beneficia de los precios bajos de los combustibles. Argumento simple y ramplón si se piensa en la enorme cantidad de dinero que mueve el narco, que puede comprar gasolineras, refinerías, oleoductos y conciencias.

El tema además pasa por otras aristas: desde la salud pública (no hay políticas ni redes para atención a jóvenes consumidores y adictos, ni inversiones en ese sentido, y la mayoría de lugares de rehabilitación mal operan de forma clandestina); la legalización de la droga; las oportunidades laborales (la desigualdad y la brecha económica es caldo de cultivo para las redes mafiosas de droga, tráfico de personas, captación ilegal de dinero, etc.), pasando por la educación. Los problemas estructurales intactos solo facilitan que la madeja de hilos del narcotráfico siga creciendo, cooptando a la gente más pobre y marginada para tareas de venta al menudeo, transporte, bodegaje, movilización y sicariato.

Las últimas cifras de muertes violentas publicadas por el Ministerio de Gobierno llegaban a 2.331 homicidios intencionales con corte a 14 de diciembre. Muerte en las calles y muertos en las cárceles. Cuatro escalofriantes y violentas masacres con un saldo de 329 fallecidos con saña dentro de los centros penitenciarios han sido, quizá, el mayor problema que ha enfrentado el gobierno de Lasso en sus primeros siete meses de mandato.

En el tema de las cárceles, todos, como Pilatos, lavándose las manos: el presidente culpando a la Constitución, la Corte Constitucional culpando al gobierno, el gobierno, la prensa y sus funcionarios culpando a los gobiernos anteriores, las organizaciones sociales y los activistas señalando con el índice a una entelequia llamada Estado, el gran culpable y, por si eso no bastara, penosamente, gran parte de la sociedad no solo ignorando el tema sino aplaudiendo la “limpieza social” en las cárceles y culpando a los organismos de derechos humanos de ignorar los derechos de las víctimas de la delincuencia. Cada uno viendo desde sus propios intereses políticos, desde su propio afán de poder o desde su ombligo, un tema en el que Ecuador parece estar embarrado hasta el cuello.

Mientras todos estén de espaldas al problema, el narco seguirá haciendo metástasis, contaminando a las instituciones públicas y privadas, financiando candidatos, comprando policías, jueces y fiscales; usando a los jóvenes para hacerlos drogodependientes y luego convertirlos en mulas, vendedores o sicarios; utilizando la falta de empleo para cooptar gentes necesitadas para que trabajen para ellos ya sea en laboratorios de elaboración de droga, transporte, distribución, bodegaje, ya sea bajo amenazas o pagando exageradamente bien, poniendo fajos de billetes contantes y sonantes en las manos de quienes serán luego presa fácil para el espiral de la violencia.

Esperanza porque el 80% de la población ha accedido a la vacuna

Sin duda alguna, el capital político del gobierno es, aún, el éxito de la vacunación. El gobierno anterior (Lenin Moreno) estuvo marcado durante la pandemia, y durante la primera etapa de vacunación, por su ineficiencia, largas colas —y maltrato— para adultos mayores en los centros de vacunación, vacunas VIP (para personas escogidas por los funcionarios inescrupulosos, incluyendo sus familiares) además de los negociados con insumos médicos o con pruebas rápidas.

La vacunación fue una de las principales ofertas de campaña de Guillermo Lasso. El gobierno ofreció nueve millones de vacunas en los primeros cien días de gobierno y hoy, de acuerdo a información del Ministerio de Salud Pública, al momento se ha conseguido una vacunación completa en 12,368.879 personas (76.84%). Desde el mes de octubre se inició la vacunación en niños mayores de 5 años y en noviembre arrancó la vacunación de refuerzo, de las cuales se han administrado 836.955 dosis².

El proceso de vacunación ha sido expedito y, a la fecha de este informe, Ecuador está entre los “top 10”, de los países con mayor población vacunada, entre Emiratos Árabes, Cuba, Portugal, Chile, Canadá, Italia, Japón y Francia, con el 79% de su población vacunada.

Para el proceso de vacunación en el país se habilitaron más de 550 centros: recintos electorales, universidades, empresas, fábricas, industrias, instituciones públicas y privadas; se conformaron hasta 250 brigadas móviles para comunidades de difícil acceso, viviendas de personas con discapacidad y personas con movilidad reducida. Desde el 13 de septiembre de 2021 se realizó la transición técnica y logística para la aplicación de la vacuna contra la covid-19 en los Centros de Salud del país. Cada establecimiento del MSP verifica que la población acorde a su territorio tenga las coberturas necesarias. Además, en diciembre se han realizado “vacunatonos”, en distintos puntos del país.

La vacunación ha permitido volver a cierta normalidad en el país: negocios y actividades productivas reactivadas, escuelas y colegios abiertos. Pero la nueva variante ómicron y su rápida propagación, ha obligado a nuevas restricciones y a nuevas medidas de prevención, en plenas festividades de fin de año: prohibición de la realización de espectáculos masivos, reducción de aforo en lugares públicos y, vista la velocidad de propagación de ómicron, el gobierno decretó la obligatoriedad de la vacunación y, en muchos lugares (restaurantes y centros comerciales principalmente), se está pidiendo el certificado de vacunación a la ciudadanía.

La vacunación sigue y no es difícil para la población acceder al refuerzo o tercera dosis de las vacunas, con vacunas disponibles en centros de salud y

² La cifra de vacunación hace parte del decreto sobre obligatoriedad de la vacunación, con corte al 21 de diciembre de 2021.

puntos de vacunación. Incluso anuncia desde ya el acceso a una cuarta dosis, si esta hiciera falta.

El gobierno, al inicio del mandato, puso un techo al precio de las pruebas de diagnóstico de la covid 19, aunque no ha puesto freno alguno a los exorbitantes precios de la atención sanitaria privada que, a falta de espacios de cuidados intensivos en hospitales públicos, ha hecho su agosto y su diciembre en esta pandemia: entre dos y cinco mil dólares la noche de cuidados intensivos, 100 mil dólares promedio el tratamiento a un paciente con un mes de hospitalización.

Hay vacunas. Sí. También hay decretos orientados a la prevención como la presentación del certificado de vacunación en lugares públicos. Pero siguen faltando camas, medicamentos, médicos y regulación. De todas formas, la vacunación es, aún, la esperanza de que el país, si junta esfuerzos, puede salir adelante y enfrentar los otros problemas que ha dejado la pandemia y la crisis actual.